JUZGADO VEINTICINCO CIVIL DEL CIRCUITO

Bogotá D.C., ocho de agosto de dos mil veintitrés

Acción de Tutela No. 110014003055 2023 00497 01

Resuelve el Juzgado la impugnación presentada contra el fallo de tutela proferido el 21 junio de 2023 por el JUZGADO CINCUENTA Y CINCO (55) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA, dentro de la acción de tutela promovida MANUEL GUSTAVO TORRES PABON en contra la SECRETARIA DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ.

1. ANTECEDENTES

1.1. MANUEL GUSTAVO TORRES PABON demando la protección constitucional de su derecho fundamental de petición, y solicitó que se ordene a la SECRETARIA DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ responder su petición radicada el día 23 de marzo de 2023.

1.2. Adujo que, el 23 de marzo de 2023 radicó un derecho de petición respecto del comparendo No. 11001000000033997980, del cual, a la fecha de presentación de la presente tutela, no ha recibido respuesta.

1.3. Admitida y notificada la acción de tutela a la SECRETARIA DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ, ésta solicitó plazo para darle contestación, no obstante, no efectuó pronunciamiento alguno.

2. EL FALLO IMPUGNADO

El Juzgado CINCUENTA Y CINCO (55) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA concedió el amparo, luego de considerar que, aun cuando la entidad accionada solicitó ampliar el término para contestar la tutela, a la fecha de emisión de la sentencia, 21 de junio de 2023, no acreditó haber dado respuesta al accionante ni a la sede judicial, situación que evidenciaba vulneración del derecho fundamental de petición al actor, por parte de la Secretaría de la Movilidad.

3. LA IMPUGNACIÓN

En tiempo, la entidad accionada presentó escrito de impugnación en el que solicitó revocar la decisión del A-quo, argumentando que no hay vulneración del derecho fundamental de petición porque mediante oficio SDC 202342105034361 de fecha 07 de junio de 2023, dio respuesta al ciudadano, la cual notificó a las direcciones electrónicas aportadas por el interesado.

En consecuencia, se configuró la carencia actual de objeto de la tutela, por hecho superado. También alego improcedencia de la acción por no acreditarse la ocurrencia de un perjuicio irremediable, que hiciera viable la misma de manera excepcional, pues en principio, según la jurisprudencia, los conflictos debe resolverse agotando los caminos ordinarios de defensa.

4. CONSIDERACIONES

4.1. La acción de tutela es un mecanismo eminentemente excepcional y residual idóneo para la protección de los derechos constitucionales fundamentales frente a la vulneración o amenaza por la acción u omisión de las autoridades públicas, y en algunos casos de los particulares, siempre que no se disponga de otra vía judicial expedita para ello, salvo que se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable al tenor de lo preceptuado en los artículos 1º, 5º y 8º del Decreto 2591 de 1991.

4.2. En este caso, el actor alega, básicamente, la vulneración de su derecho fundamental de petición. Respecto de esta garantía fundamental, el artículo 13 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el canon 1º de la Ley 1755 de 2015 *-por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-*, el cual se acompaña con lo previsto en la norma 23 Superior, lo ha definido como el que tiene toda persona para presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular, con miras a obtener una pronta resolución, advirtiéndose, además, por vía jurisprudencial que a diferencia de los términos o procedimientos judiciales, esta protección fundamental es una vía expedita de acceso directo a las autoridades, y aunque su objetivo no incluye la exigencia de una resolución en un sentido determinado, sí intima para que exista un pronunciamiento oportuno y concreto frente a la reclamación que se invoca.¹

Igualmente, por disposición legal el derecho de petición resulta aplicable a los particulares, puesto que, en los artículos 32² y 33³ del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (sustituido por la Ley 1755 de 2015), se prevé la posibilidad de elevar peticiones ante organizaciones privadas para garantizar sus derechos fundamentales, destacando

¹ Artículo 23.C.P

² Artículo 32. Derecho de petición ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

³ Artículo 33. Derecho de petición de los usuarios ante instituciones privadas.

dichas disposiciones legales que, salvo norma legal especial, el trámite y resolución de las peticiones estarán sometidos a las reglas generales del derecho de petición frente a autoridades públicas.

En atención a lo anterior, resulta pertinente recordar que, conforme lo establece el artículo 14 del CPACA, también sustituido, salvo norma especial, las peticiones se resolverán o contestarán dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su recibo.

4.4. En este caso, advierte el juzgado que el fallo impugnado deberá ser confirmado porque al momento de su proferimiento, la entidad accionada no informó ni acreditó haber dado respuesta del derecho de petición al accionante, ciertamente porque omitió contestarle la acción de tutela al juzgado de conocimiento antes de que emitiera el fallo, a pesar de que solicitó ampliación del plazo para pronunciarse frente a la acción constitucional, por lo que no resulta admisible que como consecuencia de la incuria de la accionada, se revoque la decisión impugnada.

La prueba de la respuesta al derecho de petición, solo vino a conocerse y demostrarse, con posterioridad al fallo de tutela de primera instancia, mediante comunicación que hacía referencia al cumplimiento a la decisión judicial allí adoptada, y además, con el escrito de impugnación en el cual se hizo mención y acreditación de la mentada respuesta. Bajo esa perspectiva, en criterio de este juzgador, la sentencia cuestionada no podría calificarse de desacertada, en tanto que se profirió con respaldo en el panorama fáctico con el cual se contaba al momento de su confección, es decir, con el silencio de la autoridad accionada y sin la acreditación de la respuesta brindada al interesado sobre su derecho de petición.

En ese orden de ideas, lo que ahora se establece es que la orden judicial contenida en el fallo de tutela se observa satisfecha, superada y cumplida⁴, situación que, en todo caso no comportaría su decaimiento, sino tener por efectivamente cumplido el mismo, dado que ahora se demuestra, que la petición fue contestada.

5. CONCLUSIÓN

Por lo brevemente expuesto, no existen razones para revocar la sentencia impugnada, por lo que se confirmará la misma.

⁴ Registro [009. 28-06-2023 CUMPLIMIENTO FALLO TUTELA - SECRETARIA DE MOVILIDAD.pdf](#)

6. DECISIÓN DE SEGUNDO GRADO

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de este Distrito Capital de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

6.1 CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 21 de junio 2023 por el JUZGADO CINCUENTA Y CINCO (55) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA, por lo expuesto en la parte motiva de esa decisión.

6.2 NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el medio más expedito.

6.3. REMITIR las diligencias a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

El Juez,

LUIS AUGUSTO DUEÑAS BARRETO

ysl

Firmado Por:

Luis Augusto Dueñas Barreto

Juez

Juzgado De Circuito

Civil 025

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **0f2835d65f16daab350c01851c9de8ab3df10c8519165d508c0d701610d72a8d**

Documento generado en 08/08/2023 08:04:22 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>